

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, Quince (15) de Septiembre de Dos Mil Veintidós (2022)

Auto Interlocutorio

MAGISTRADA PONENTE: LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2018-00945-00
EJECUTANTE:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co paniaquacali1@gmail.com
EJECUTADO:	YOLANDA DELGADILLO QUIJANO yodelqui55@hotmail.com - yodelqui@hotmail.com
ASUNTO	NIEGA DECRETO MEDIDA CAUTELAR

I. OBJETO DE LA DECISION

Procede el Despacho a resolver la solicitud de medida cautelar formulada por la parte demandante, con la que pretende suspender provisionalmente los efectos de la Resolución nro. GNR No. 027556 del 7 de marzo de 2013 proferida por COLPENSIONES, que reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez en favor de la señora Yolanda Delgadillo Quijano.

II. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, indicó¹ que el acto administrativo cuya suspensión provisional pretende, se encuentra contenido en la Resolución nro. GNR No. 027556 del 7 de marzo de 2013, mediante el cual se reconoció la pensión de vejez a favor de la señora Yolanda Delgadillo Quijano, efectiva a partir del 6 de enero de 2013, en cuantía de \$1.040.990, se dispuso el pago de un retroactivo por valor de \$1.334.482, liquidación para la cual, se tuvo en cuenta un tiempo de 1078 semanas cotizadas, con un IBL de \$1.334.602 y tasa de reemplazo del 78%, todo bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990.

Sostuvo que la demandada cuenta con 7586 días laborados, correspondientes a 1.083 semanas de cotización en toda su vida laboral.

Señaló que el acto administrativo enjuiciado es contrario a derecho ya que la señora Yolanda Delgadillo Quijano, se trasladó de RAIS a RPM el día 1 de junio de 2009, razón por la cual debía contar con 15 años de servicio al 1 de abril de 1994, para conservar el régimen de transición, requisito que no reúne la asegurada.

Precisó que todos los trabajadores del sector privado y público pueden seleccionar un régimen de pensiones, pues ambos son excluyentes.

¹Folios 8 – 11 del expediente físico

También señaló que solo las personas que a la entrada en vigencia del sistema General de Pensiones acrediten 15 años o más de servicios y/o cotizaciones conservaran el régimen de transición en caso de traslado de régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida.

Indicó que la señora Delgadillo Quijano al 1 de abril de 1994, cumplía con el requisito de la edad al contar con 36 años de edad, que no estaba afiliada al RPM debido a que se trasladó del RAIS al RPM el 1 de junio de 2009, razón por la cual para recuperar el régimen de transición es necesario que la demandada tuviera 15 años de servicio correspondiente a 750 semanas de cotización, y ella solo contaba con 733 semanas de cotización que corresponden a 14 años y 3 meses de cotización.

Sostuvo que el reconocimiento realizado bajo el Decreto 758 de 1990 en aplicación del régimen de transición no estaba conforme a derecho, pues la asegurada al no contar con 15 años de servicio requeridos ha perdido el régimen de transición.

Precisó que, al perder la transición, se debe realizar el estudio bajo los parámetros de la Ley 797 de 2003, teniendo en cuenta que, la asegurada cumplió con el requisito de la edad establecida al contar con 57 años de edad, pero solo tenía 1083 semanas cotizadas, siendo necesarias 1300 semanas de cotización, por lo que no reúne los requisitos para acceder a la pensión de vejez bajo los parámetros de la mencionada disposición.

Señaló que el reconocimiento de la pensión de vejez respecto de la cual se solicita la nulidad, se expidió en contravía de la Constitución y la Ley.

Indicó que, el pago de una prestación generada sin el cumplimiento de los requisitos legales, atenta contra el principio de estabilidad financiera, afectando el erario público y la sostenibilidad del sistema.

III. TRASLADO DE LA SOLICITUD

Conforme con la constancia secretarial visible en SAMAI², la parte demandada dentro del término de traslado, guardó silencio.

IV. LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL

Dispone el artículo 229 de la Ley 1437 del 2011, que las medidas cautelares constituyen una garantía de efectividad del derecho al acceso a la administración de justicia ante la necesidad de proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

Así mismo, el artículo 230 dispone lo siguiente:

*“Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, **y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.** Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas, (negritas y subrayas propias del despacho):*

1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

² Archivo digital en Samai (Desfijación traslado solicitud medida cautelar – índice 48)

2. *Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.*

3. *Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.*

4. *Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.*

5. *Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.*

PARÁGRAFO. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente”.

A su turno el artículo 231 del mismo compendio normativo dispone:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, **cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.** Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos”.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurren los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.
4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:
 - a. Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o
 - b. Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.

V.- RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR



Para resolver la medida tendiente a obtener la suspensión provisional del acto administrativo acusado Resolución nro. GNR No. 027556 del 7 de marzo de 2013³ proferida por COLPENSIONES, en primer término, resulta necesario verificar los aspectos tenidos en cuenta por la entidad demandante en el acto administrativo por medio del cual, le fue reconocida la pensión de vejez a la aquí demandada:

“(…)
Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 7551 días laborados, correspondientes a 1.078 semanas.

Que nació el 6 de enero de 1958 y actualmente cuenta con 55 años de edad.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 758 del 11 de abril de 1990, “Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: a) Sesenta (60) o mas años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o mas años de edad, si se es mujer y, b) Un mínimo de quinientos (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo”.

Que la norma precitada en el párrafo inmediatamente anterior se aplica por remisión del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que textualmente establece:

“La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o mas años de edad sin son mujeres o cuarenta (40) o mas años de edad si son hombres, o quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993”.

(…)
Que a partir de lo anteriormente enunciado se procedió a realizar la liquidación de la prestación reconocida, la cual se resume de la siguiente manera:

IBL: 1.334.602 x 78.000 = \$1.040.990
SON: UN MILLON CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.

Para el análisis de la pensión reconocida, se tomó en cuenta que el (la) peticionaria (a) cumple los requisitos para los siguientes tipos de pensión, siendo aplicada por favorabilidad el indicado en la columna “Aceptada Sistema”:

Nombre	Fecha Status	Fecha Efectividad	Valor IBL 1	Valor IBL 2	Mejor IBL	% IBL	Valor Pensión Mensual	Aceptada
PENSION DE VEJEZ Decreto 758 de 1990 REGIMEN DE TRANSICIÓN MUJER	6 de enero de 2013	6 de enero de 2013	1.334.602.00	0.00	1	78.00	1.040.990.00	SI

(…)”

Revisado el plenario, encuentra el despacho que mientras Colpensiones en el escrito de la demanda indica que la señora Yolanda Delgadillo Quijano solo cumplía con uno de los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición como es el de la edad, y, no contaba con el número mínimo de semanas cotizadas, no obstante, en el acto administrativo objeto de control jurisdiccional, se indica que la

³ Archivo digital en SharePoint ([Resolución GNR 027556 de 2013](#))



demandada cumplió con los requisitos para ser beneficiaria de dicho régimen, lo que pretende desvirtuar en su demanda con la afirmación de que la pensionada para la fecha de 1994 si bien reunía el requisito de la edad, como quiera que en el año de 1999 se trasladó del RPM al RAIS, por tanto, pese a que se devolvió en el año de 2009, perdió el régimen de transición.

La medida cautelar no puede ser despachada de manera favorable en este momento procesal, por cuanto para el efecto, debe determinarse con exactitud el tiempo cotizado por la pensionada, para la fecha del 1º de abril de 1994, a fin de concluir como lo pretende la actora, que la demandada, no había cotizado 15 años al sistema de pensiones, y, por ende, había perdido el régimen de transición, tal como así lo ha precisado la doctrina constitucional.

Para tales efectos, resulta menester analizar todo el material probatorio allegado, incluidos los antecedentes administrativos, que permita definir sobre la legalidad del acto demandado.

En consecuencia, se;

R E S U E L V E

PRIMERO: NEGAR la solicitud de suspensión provisional del acto demandado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Todos los memoriales que se presenten durante el trámite del presente proceso, deberán ser allegados a través de la **ventanilla virtual** en la plataforma Samai (<https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/>) con copia a los correos electrónicos de los demás sujetos procesales.

Notifíquese y Cúmplase.

(Firmado Electrónicamente por Samai)
LUZ ELENA SIERRA VALENCIA
Magistrada